



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ D.C.

Bogotá D. C., dos (2) de julio de dos mil diecinueve (2019)

RADICADO:	11001-33-35-026-2016-00302-00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	PAULA ANDREA TORO RAMÍREZ
DEMANDADO:	NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL- FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

OBEDÉZCASE y CÚMPLASE, lo dispuesto por el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, Magistrado Ponente, José María Armenta Fuentes, que en providencia dl 31 de enero de 2019, resolvió revocar el auto proferido por este Despacho, el 24 de febrero de 2017, en el cual se dispuso rechazar por caducidad la demanda presentada; y en su lugar dispuso:

*“**PRIMERO:** Revocar el auto del 24 de febrero de 2017, proferido por el Juzgado veintiséis (26) Administrativo del Circuito de Bogotá, a través del cual se rechazo de plano la demanda presentada por la demandante PAULA ANDREA TORO RAMÍREZ, contra la NACIÓN MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL- FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y FIDUPREVISORA S.A.”*

Así las cosas, y atendiendo lo ordenado por el Tribunal, se procederá al estudio de admisibilidad de la presente demanda.

Recuerda el Despacho, que en el presente asunto, **PAULA ANDREA TORO RAMÍREZ**, promueve demanda en contra de la **NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL- FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.**, con el objeto de declarar la nulidad del acto ficto o presunto negativo, en relación a la petición radicada el 23 de octubre de 2013, antes la Secretaría de Educación de Bogotá, respecto del reconocimiento y pago de la sanción moratoria, por mora en el pago de la cesantías parciales, contemplada en la Ley 1071 del 2006. Así mismo, solicita la nulidad del oficio No.00019954 del 25 de agosto de 2014, emitido por la Fiduprevisora.

Pues bien, analizado el escrito introductorio, este Despacho observa que en este momento, no es posible dar trámite a la demanda presentada, teniendo en cuenta las siguientes,

CONSIDERACIONES

El Capítulo III de la Ley 1437 de 2011, consagra los requisitos que deben reunir las demandas, y para el efecto el artículo 162 dispuso:

“Artículo 162 Contenido de la Demanda. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá:

1. La designación de las partes y sus representantes.
2. **Lo que se pretenda, expresando con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado, con observancia de lo dispuesto en este mismo Código para la acumulación de pretensiones.**
3. Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados.
4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.
5. La petición de las pruebas que el demandante pretende hacer valer. En todo caso, este deberá aportar todas las documentales que se encuentren en su poder.
6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia.
7. El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, podrán indicar también su dirección electrónica.”

Así mismo, el artículo 166 ibídem, señaló que la demanda debe venir acompañada, entre otros, de la copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, comunicación, notificación o ejecución, de los documentos y pruebas anticipadas que se pretenda hacer valer y que se encuentren en poder del demandante, y las copias de la demanda y de sus anexos para la notificación a las partes y al Ministerio Público.

Dicho precepto debe entenderse concordante con el art. 612 del Código General del Proceso, que modificó el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011.

Visto esto y al realizar una revisión de tales requisitos, se pudo establecer que la demanda y los anexos, no cumplen con la totalidad de los mismos, como se indica a continuación:

1. De los actos administrativos demandados

El apoderado de la parte demandante solicita:

- “1.** Se declare la existencia del silencio administrativo negativo, en relación con el derecho de petición radicado el 23 de octubre de 2013, ante el fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio- secretaria de educación de Bogotá, en el que solicité el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, contemplada en la Ley 1071 del 2006, artículo 5°, por el pago tardío de las cesantías parciales.
- 2.** Se declare la nulidad del acto administrativo ficto o presunto citado en el numeral anterior.

3. Subsidiariamente solicito se declare la nulidad del oficio con radicado No. EE 00019954 de 25 de agosto de 2014, emitido por la Fiduprevisora S.A.
(...)”

Frente a la pretensiones, encuentra el Despacho, como bien lo afirma la parte actora en el escrito de demanda, que frente a la petición radicada ante la Secretaría Distrital de Educación, el 23 de octubre de 2013, la entidad avocó conocimiento, **dando respuesta el 6 de noviembre de 2011** (fl. 13); respuesta en la que indicó que la petición sería remitida a la Fiduprevisora S.A.

Posteriormente, la Fiduprevisora S.A., mediante oficio No. 000199954 del 2014 (fls. 14-15), avocó conocimiento de la predicha petición, dando respuesta a el 25 de agosto de 2014.

Pues bien, de acuerdo a lo anteriormente estipulado, encuentra el Despacho que, las entidades demandadas, independientemente del contenido de la respuesta, si realizaron pronunciamiento sobre la petición realizada por la demandante; tanto la Secretaría Distrital de Educación, a través del oficio No. 2013-145690 del 6 de noviembre de 2013, como la Fiduprevisora, a través del oficio No. 000199954 del 2014.

De lo anterior, concluye el Despacho, que las pretensiones de la demanda resultan incongruentes toda vez que se solicita: 1) la declaratoria y nulidad de un acto ficto o presunto negativo, respecto de una petición radicada el 23 de octubre de 2013, y su vez, se solicita 2) la nulidad del oficio por medio del cual se dio respuesta a la predicha petición radicada el 23 de octubre de 2013.

Así las cosas, las pretensiones de la demanda resultan incongruentes con la normatividad que regula el silencio administrativo, habida consideración que no es jurídicamente posible solicitar la nulidad de un acto expreso, considerando que el mismo a la vez es un acto ficto producto del silencio de la administración.

Lo anterior en razón a que al solicitar la nulidad del oficio mediante el cual se da respuesta a una petición, independientemente de su contenido, **se interpreta y considera tal oficio como un acto administrativo definitivo**, los que de acuerdo a los artículos 43, 49, 50 y 84 de la Ley 1437 de 2011, son los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, y por tanto, son susceptibles de recursos por la vía gubernativa y asimismo de control jurisdiccional contencioso administrativo; por ende, **al considerar tal oficio como un acto administrativo definitivo, tácitamente se está reconociendo que hubo una respuesta por parte de la administración, lo que quiere decir, que no podría considerarse o pretenderse el silencio administrativo toda vez que se está reconociendo que hubo una respuesta por parte de la administración.**

Por lo tanto, debe revisarse si en efecto existió silencio de la administración, o si por el contrario las autoridades correspondientes emitieron un pronunciamiento expreso frente a lo pretendido en la petición, para luego de ello elevar las pretensiones que correspondan, ya sea solicitando la declaración y nulidad de un acto ficto, o la nulidad de uno expreso, más no ambas, pues se reitera que ello es jurídicamente imposible.

Por tanto, este Despacho, conminará al apoderado judicial de la parte actora, a fin de que modifique las pretensiones suscitadas dentro del presente medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Así las cosas, y en virtud de las consideraciones anteriores, la demanda presentada por el apoderado judicial de la actora, no será admitida hasta tanto no sea presentada en debida forma y bajo los lineamientos de la Ley 1437 del 2011, 1450 del 2011 y 1564 del 2012, normas vigentes en materia Contenciosa Administrativa.

Por lo expuesto, el Despacho,

R E S U E L V E

PRIMERO.- INADMITIR LA DEMANDA promovida por **PAULA ANDREA TORO RAMÍREZ**, en contra de la **NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL- FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.**



SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, se concede a la parte demandante el término perentorio de diez (10) días, con el fin que subsane los defectos señalados en la parte motiva de este proveído, so pena de rechazarse la demanda, al tenor de lo dispuesto en el artículo 170 del C.P.A.C.A.

Finalmente, es del caso señalar, que también se deberá allegar en medio magnético la subsanación que se realice en los términos indicados a lo largo de este proveído.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ANDRÉS JOSÉ QUINTERO GNECCO

Juez


JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.
Por anotación en ESTADO ELECTRÓNICO notifico a las partes la providencia anterior hoy 3 DE JULIO DE 2019 , a las ocho de la mañana (8:00 a.m.)

LIZZETH VIVIANA CANGREJO SILVA
SECRETARIA